

**PLANTEA REVOCATORIA. SOLICITA SE DESGLOSE
A TODO EVENTO REFUTA MANIFESTACIONES
APELA EN SUBSIDIO
FORMULA RESERVA DEL CASO FEDERAL**

Señor Juez Federal:

Gastón Valtier, por la representación de **“PORTA HNOS S.A.”**, en estos autos **"CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN s/AMPARO AMBIENTAL"** (Expte. N° 21076/2016), ante V.S. comparezco y digo:

I. Objeto de esta presentación.

Que vengo en tiempo y forma a:

- a) Interponer recurso de reposición, contra el decreto de fecha 02.05.2019, solicitando su revocación por contrario imperio, y disponiéndose en consecuencia, el desglose de la presentación de la actora obrante a fs. 3022/3025, por haber sido la misma presentada en forma extemporánea.
- b) En subsidio, peticionar se mande testar las expresiones de la actora que exceden el marco de la vista conferida por auto de fecha 22.03.2019.
- c) Deducir recurso de apelación subsidiario, en los términos del art. 248 del Código Procesal;
- d) A todo evento, contestar las inexactitudes y falsedades consignadas por la actora en el libelo cuyo desglose se solicita.
- e) Hacer reserva del caso federal.

Fundo lo expuesto en las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente se expondrán. En lo que hace a la temporalidad de esta presentación, se deja constancia que el decreto de fecha 02.05.2019 quedó notificado *ministerio legis* a las partes con fecha 03.05.2019, con lo cual el plazo para interponer el presente recurso de reposición, vence en las dos primeras horas del día 09.05.2019.

II. Lo acontecido en autos.

2.1. Con fecha 13.03.2019, Porta Hnos. S.A. hace saber la existencia de la realización de una “Auditoría Ambiental” (ver fs. 2893/2894), con el objeto de arrimar a estos actuados, mayores elementos de juicio a la hora de dictar resolución sobre este amparo.

Dicha presentación fue proveída por V.S. con fecha 22.03.2019, decretándose en dicha oportunidad: *“Al escrito de fs. 2893/2894 téngase por acompañado el estudio y análisis respaldatorios por parte de PORTA HNOS. S.A. con noticia a las partes”*.

2.2. La providencia tomó nota *ministerio legis* el día martes 26 de marzo, desde que no consta en el sistema digital que la actora hubiera dejado nota ese día. A partir de esa fecha, la actora tenía varias posibilidades, a saber:

- (i) No consentir la presentación por vía de una revocatoria presentada en el término de 3 días,
- (ii) En su caso, pedir una aclaratoria en el mismo plazo,
- (iii) Contestar el traslado de la auditoría, reconociéndola o no, dentro del plazo de 5 días, o;
- (iv) No presentar nada y consentir la presentación.

En definitiva, los 5 días conferidos por el Código Procesal para manifestarse respecto de la auditoría ambiental acompañada por esta parte, fenecieron en las dos primeras horas del día 5 de abril ppdo..

2.3. Debemos concluir que la actora ha optado por la alternativa indicada en (iv), atento que no ha efectuado ninguna de las acciones indicadas en los restantes puntos (i), (ii) y (iii), motivo por el cual, por el principio de preclusión procesal, debe entenderse que la auditoría ambiental presentada por “Porta Hnos. S.A.” ha quedado consentida por la actora.

2.4. Ahora bien, más de un mes después de la providencia que hacía saber de la presentación de la referida auditoría ambiental; más precisamente, con fecha 02.05.2019, la parte actora efectúa una presentación intitulada **“Comparece – Manifiesta”**, mediante la cual refuta las conclusiones de la auditoría ambiental acompañada por mi representada y, excediéndose manifiestamente en los términos de la vista conferida, realiza una suerte de alegato sobre su posición en el expediente cuando, en realidad, el sentido del traslado debió limitarse a que reconozca o no la autenticidad del documento.

Inclusive, la actora solicita se tengan presentes sus manifestaciones y, oportunamente, ***“no se meritúe las Auditorías Ambientales incorporadas por la empresa Porta a la causa”***.

A dicha presentación, V.S. provee en fecha 02.05.2019 *“Al escrito que antecede téngase presente lo manifestado por la parte actora para su oportunidad”*.

2.5. Como claramente puede apreciarse, desde el análisis de la temporalidad procesal, la presentación de la actora es total y absolutamente extemporánea, y, en consecuencia, corresponde proceder a su desglose. En efecto, hemos hecho más arriba el

cálculo del plazo en el cual vencía el traslado y, en su caso, en el que debió haber efectuado cualquier manifestación acerca de la auditoría ambiental acompañada por mi representada. El plazo venció el 5 de abril de 2019 en las dos primeras horas. No obstante, la actora pretende contestar el traslado casi un mes después del vencimiento del plazo, lo que resulta a todas luces inadmisibile. De allí que corresponda, y se solicita expresamente, su desglose.

III. Amplitud de la prueba y etapas procesales.

3.1. No solo la presentación es extemporánea. También desde el punto de vista del contenido, la pieza procesal resulta improcedente.

Esta parte se encuentra ante la gran dificultad que supone dilucidar si lo que la actora quiso hacer con su presentación “Comparece – Manifiesta”, es una valoración de la prueba, es decir, un alegato propiamente dicho a pesar de encontrarnos en etapa de producción de la prueba; o bien, una revocatoria del despacho de fecha 22.03.2019, que tiene presente el estudio y análisis acompañado por “Porta Hnos S.A.” con traslado a las partes; o sea, intentar la reposición de lo proveído hace más de un mes atrás.

En efecto, dejando de lado el petitorio final de la reseñada presentación, el actor lisa y llanamente, alega, párrafo tras párrafo acerca del porqué V.S. debería dejar de lado la auditoría presentada por “Porta Hnos. S.A.”, por cuanto la misma, claro está, que no resulta favorable a sus pretensiones.

3.2. Tal es así, que pueden leerse líneas como:

“Que en lo que interesa a esta parte, cabe destacar que: “La Auditoría Ambiental es un instrumento de gestión que consiste en un proceso de revisión sistemático, documentado y objetivo de una actividad o acción determinada que apunta a identificar, evaluar corregir y controlar el potencial o real deterioro ambiental, facilitando la comunicación e información tanto por parte de los organismos públicos como de la opinión pública en general”.

O también que:

“Desde la Doctrina Especializada se nos enseña que: “(..) uno de los principales mecanismos de prevención de daños ambientales es el Estudio de Impacto Ambiental, el más clásico”.

3.3. Y así podría citarse la presentación entera por cuanto, de principio a fin, se vale de la misma para desvirtuar la auditoría traída a estos autos, invocando cuanta doctrina y artículos de Ley conjeturalmente reseñados, sean capaces de proyectar un menor valor sobre la prueba que se tuvo por producida con fecha 22.03.2019.

3.4. Yendo al análisis de la situación desde el punto de vista procesal, dado el principio de amplitud que impera en cuanto al ofrecimiento y producción de pruebas por cada una de las partes, sería jurídicamente inadmisibile que el acto que dispone la apertura a prueba pretendiera limitar *a priori* cuáles serán los hechos o circunstancias sobre los que debe producirse la prueba.

No obstante, es conducente a un mejor ordenamiento del procedimiento, tanto en lo que hace a las defensas como a la eficacia de la decisión del tribunal, que se adopte una decisión previa respecto de los puntos concretos de divergencia en cuanto a los hechos.

3.5. En el caso que nos ocupa, sin perjuicio de la extemporaneidad que ha sido materia de análisis en el capítulo anterior, la parte actora se ha excedido en los alcances que debió tener su contestación, en el sentido que, solamente, debía reconocer o no la autenticidad del documento respecto del cual se le confirió un traslado.

Muy por el contrario, excediéndose sobremanera, aborda temas que ninguna o nula vinculación tienen con el documento que se sometió a su consideración.

Representa, como se dijo, más un alegato de su posición ante los hechos ventilados en el expediente, que un traslado sobre un documento.

3.6. De allí que, de no concederse el desglose solicitado en el capítulo anterior por razones de extemporaneidad, como mínimo deberían testarse las frases consignadas en el escrito de fs. 3022/3025 que excedan el concepto de contestación del traslado ordenado por el decreto del 22.03.2019.. Solicitamos ello en subsidio, para el caso de que no se ordenare el desglose, que es lo que procesalmente corresponde.

3.7. Demás está aclarar que llevar adelante actuaciones procesales en etapas donde no corresponda y peor aún, de forma prematura –como ha hecho la actora en estos autos, al presentar una suerte de alegato sobre la prueba producida– importa desvirtuar el ordenamiento procesal creado al efecto. Se pierde entonces la imparcialidad que supone debiera tener la sana crítica de V.S., al permitir agregar valoraciones probatorias prematuras, tales como alegar antes de concluida su etapa precedente.

Y más aún en el caso de autos, donde ni siquiera se prevé el alegato como etapa procesal, lo cual denota su evidente improcedencia.

3.8. De allí la improcedencia del contenido del escrito en traslado, y el pedido de que, para el hipotético caso de que no se hiciera lugar al desglose por extemporaneidad, deberán testarse las frases que excedan la contestación del traslado propiamente dicha, esto es, pronunciarse por conocimiento o desconocimiento de la autenticidad del documento en vista.

IV. En subsidio, refuta manifestaciones de la actora.

La actora en su escrito incluye una serie de manifestaciones en las que efectúa aseveraciones que no son ciertas, y cita como aplicables normas que no lo son. A saber:

4.1. Afirma la actora que “*ni la construcción de la Planta, ni la actividad cuentan con el respectivo acto administrativo de autorización como resultado de la evaluación del impacto ambiental (EIA)*”. **FALSO.**

En efecto, como se explicó detalladamente al contestar la demanda, la construcción original de la planta fue precedida de un Aviso de Proyecto (tal como lo exigía la Ley 7343 y el Decreto 3290/90), el cual fue aprobado mediante **Resolución 38/00 de la Agencia Córdoba Ambiente**. Posteriormente, la ampliación de la Planta que incluyó la destilación de alcoholes a partir de cereales, también motivó la presentación de un Aviso de Proyecto (conforme Ley 7343 y Decreto 2131/00), el cual fue aprobado mediante **Resolución DIA 975/10 de la Municipalidad de Córdoba**, de conformidad al art. 9 del Decreto 2131/00, el cual expresamente habilitada a efectuar la presentación y tramitación del aviso de proyecto ante la Agencia Córdoba Ambiente y/o ante el Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto.

Surge claro entonces que tanto la construcción de la Planta como su posterior ampliación, contaron con la aprobación de su respectivo aviso de proyecto en el contexto de las normas aplicables en materia de evaluación del impacto ambiental.

Ahora bien, sin fundamento fáctico alguno, la actora insiste falsamente en sostener la ausencia de autorizaciones que en los hechos existen y además, sigue invocando como aplicables a la construcción de la planta y su ampliación la Ley 10.208, la cual es de fecha posterior a tales obras (2014); por lo que se trata de una invocación errónea del derecho aplicable a tales obras. En efecto: la ampliación de la Planta fue aprobada en el año 2010, por lo que una Ley posterior (Ley 10.208 del año 2014) no resulta aplicable a la aprobación ambiental de la misma. Por otra parte, lo que la actora denomina “*la actividad*”, es decir la producción de alcohol a partir de cereales, no está sujeta a la Ley 26.093 por lo que la Secretaría de Energía no es autoridad de aplicación de la actividad de PORTA HNOS..

Por todo ello, surge claro que la empresa SI cumplió con las normas sobre EIA aplicables, y cuenta con las autorizaciones administrativas requeridas. En este sentido resulta llamativa la insistencia de la actora en afirmar lo que no es cierto y que, además, se encuentra claramente desmentido por la documental acompañada, por la prueba informativa ya producida en esta causa, y el accionar de las autoridades de aplicación.

4.2. Afirma la actora que “*existe un peligro claro de daño irreversible y una ausencia de información relativa a dicho perjuicio*”. **Esta afirmación no solo es falsa, sino que configura una falta de respeto a la inteligencia de las demás partes y de V.S..**

En efecto: al haberse aprobado los estudios ambientales previos (aviso de proyecto) a cada una de las obras, las autoridades cuentan con la información ambiental adecuada.

Pero no solo eso, al contestar la demanda se acompañó una abundante y rigurosa prueba documental con las mediciones efectuadas por la UTN, las diversas auditorías efectuadas en distintos años por las autoridades de aplicación, la pericia efectuada en sede penal que descarta cualquier tipo de contaminación y, finalmente, la auditoría recientemente efectuada por la autoridad ambiental provincial que concluye de igual forma, que motivó el escrito de la actora.

Por ello, la “alegre e irresponsable” afirmación de la actora de que “*existe un peligro de daño irreversible*” y “*ausencia de información*”, no puede ser tomada seriamente ante la abrumadora prueba citada y acompañada a este expediente, y la reciente auditoría de la autoridad que, luego de auditar procesos y efluentes de la planta, concluye que la empresa cumple con el Plan de Gestión Ambiental.

Por todo ello, - existencia de abundante información y ausencia de peligro de daño irreversible - no resulta aplicable a la situación de autos el principio precautorio que invoca la actora.

4.3. La aprobación del EIA de la Planta de Bioetanol fue efectuada por la Municipalidad (Res.975/10). La actora también hace referencia a que en el oficio respondido en estos autos por la Secretaria de Ambiente de la Provincia, se informa que no ha otorgado la Licencia Ambiental. Esto es correcto ya que, como también se ha explicado, la ampliación de la Planta y la consiguiente autorización ambiental fue otorgada en el año 2010 mediante Resolución DIA 975/10 de la Municipalidad de Córdoba, de conformidad al art. 9 del Decreto 2131/00, el cual expresamente habilitaba a efectuar “*la presentación y tramitación del aviso de proyecto ante la Agencia Córdoba Ambiente y/o ante el Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto*”. En efecto: esto fue efectuado de este modo con el sustento legal indicado y de conformidad a la práctica administrativa consolidada durante más de 10 años entre la autoridad ambiental provincial y la municipal, y al “Convenio de Cooperación Institucional entre la Provincia y la Municipalidad de Córdoba” para la articulación normativa del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, citado en nuestra contestación de demanda. Por otra parte, tan claro es que la autoridad provincial considera aprobado el EIA que se ha limitado, desde el año 2012 a la fecha, a efectuar auditorías ambientales a la Planta.

En este sentido es correcto lo afirmado por la actora que en su escrito textualmente dice que “... *LA AUDITORIA AMBIENTAL SUPONE REVISAR PERIÓDICAMENTE UNA ACTIVIDAD QUE ANTERIORMENTE HA SIDO APROBADA Y AUTORIZADA, SON AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO*”. En efecto, precisamente, como la Autoridad Provincial sabe que la ampliación de la Planta de Porta ya ha sido autorizada en el año 2010 en el marco del procedimiento de EIA, en la misma respuesta al oficio señala que ha efectuado auditorías ambientales a la planta de PORTA en 2012, 2014, 2016 y, agregamos, ahora en 2018.

¿Por qué y para qué haría la autoridad provincial auditorías ambientales de seguimiento en una planta “no autorizada” (según lo que dice la actora)? Si fuera cierto que

la Planta no está autorizada desde el punto de vista ambiental, la autoridad provincial, en lugar de auditar, intimaría a cumplir y a obtener la autorización.

Nada de esto ocurre porque la ampliación de la Planta obtuvo su autorización ambiental en 2010 y, posteriormente, ha sido controlada por auditorías ambientales dispuestas por las autoridades ambientales provinciales y municipales.

4.4. Simplemente cabe concluir que el escrito de la actora efectúa afirmaciones que son claramente desvirtuadas por los hechos citados (autorizaciones, auditorías, mediciones, etc.), y por la conducta de las autoridades ambientales provinciales y municipales.

V. Apela en subsidio.

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la reposición intentada, dejo planteado, subsidiariamente y en los términos del art. 248 del Código Procesal, recurso de apelación contra dicho pronunciamiento.

VI. Reserva del caso federal.

Para el hipotético supuesto de que esta presentación se resuelva en sentido contrario a la postura esbozada por mi representada, se formula expresa reserva de acudir oportunamente por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el artículo 14 de la Ley 48 y el art. 6 de la Ley 4055, toda vez que en el presente caso se da un supuesto de cuestión federal simple en la medida que se estarían afectando principios, derechos y garantías de raigambre constitucional que asisten a mi representada (entre otros, artículos, 14 —de ejercer industria lícita—, 17 -propiedad- y 18 -defensa en juicio y violación del juez natural-, 116 —deslinde de competencias jurisdiccionales—, todos ellos de la Constitución Nacional).

Asimismo, se formula expresa reserva de recurrir a la instancia extraordinaria por “arbitrariedad de sentencia” y en función de la “gravedad institucional” del tema, invocando a tal efecto la doctrina elaborada en tal sentido por nuestro más Alto Tribunal de Justicia.

VII. Petitorio

Por todo lo expuesto a V.S. pido:

7.1. Tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de reposición y apelación en subsidio en contra del Decreto de fecha 02.05.2019.

7.2. En su oportunidad, al resolver, disponga su revocación por contrario imperio, ordenando el desglose del escrito de fs. 3022/3025 presentado por la actora.

7.3. En subsidio, mande testar el contenido del libelo en cuestión, en todo lo que exceda el pronunciamiento sobre el reconocimiento o desconocimiento de la autenticidad del documento en vista.

7.4. En su defecto, tenga presente el recurso de apelación en subsidio y se sirva concederlo y elevar las actuaciones al Superior en la forma de estilo.

7.5. Tenga presente, subsidiariamente, las manifestaciones vertidas en el capítulo V de esta presentación.

7.6. Tenga presente la reserva del caso federal.

Provea V.S. de conformidad

SERA JUSTICIA.